

No. 37584

**Spain
and
Russian Federation**

Convention between the Kingdom of Spain and the Russian Federation on the transfer of sentenced persons for the enforcement of custodial sentences. Moscow, 16 January 1998

Entry into force: provisionally on 16 January 1998 by signature and definitively on 21 June 2001, in accordance with article 18

Authentic texts: Spanish and Russian

Registration with the Secretariat of the United Nations: Spain, 5 July 2001

**Espagne
et
Fédération de Russie**

Convention entre le Royaume d'Espagne et la Fédération de Russie sur le transfèrement des personnes condamnées pour l'accomplissement de peines privatives de liberté. Moscou, 16 janvier 1998

Entrée en vigueur : provisoirement le 16 janvier 1998 par signature et définitivement le 21 juin 2001, conformément à l'article 18

Textes authentiques : espagnol et russe

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Espagne, 5 juillet 2001

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

**CONVENIO
ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA FEDERACION DE RUSIA
RELATIVO AL TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD**

El Reino de España y la Federación de Rusia,

Considerando que la cooperación judicial entre los Estados debe servir a los intereses de una correcta administración de justicia y favorecer la reinserción social de las personas que cumplen una condena,

Considerando que esos objetivos exigen que las personas privadas de su libertad por la comisión de un delito tengan la posibilidad de cumplir su condena en el país del cual sean nacionales o en el que tengan su residencia permanente,

Considerando la necesidad de garantizar el total respeto a los derechos humanos,

Convienen en lo siguiente:

Artículo 1

1. De conformidad con lo dispuesto en el presente Convenio, las Partes Contratantes se obligan a prestarse mutuamente la más amplia colaboración en materia de traslado de personas condenadas al Estado del que sean nacionales o en el que tengan su residencia permanente, teniendo en cuenta que, en este último caso, dichas personas no sean nacionales del Estado de condena, para el cumplimiento en el mismo del resto de la condena.

Artículo 2

A los efectos del presente Convenio:

1. La expresión "condenado a una pena privativa de libertad" designará a cualquier persona que cumpla una pena consistente en la privación de libertad en virtud de una sentencia firme.

2. Por "Estado de condena" se entenderá el Estado en el que hubiera sido condenada la persona que pueda ser o haya sido trasladada con el fin de cumplir

su pena.

3. Por "Estado de cumplimiento" se entenderá el Estado al que la persona condenada pueda ser o haya sido trasladada para el cumplimiento de la pena.

Artículo 3

1. El traslado de la persona condenada para el cumplimiento de la pena podrá llevarse a cabo a solicitud de:

- el Estado de condena;
- el Estado de cumplimiento.

2. La persona condenada, sus parientes más cercanos o su representante legal, tendrán derecho a solicitar a las autoridades competentes del Estado de condena o del Estado de cumplimiento el traslado de la persona condenada.

3. El Estado de condena informará del contenido del presente Convenio a todas las personas condenadas a las que pueda ser aplicable el presente Convenio.

4. El traslado tendrá lugar cuando se haya obtenido el consentimiento tanto del Estado de condena como del Estado de cumplimiento.

Artículo 4

El traslado de la persona condenada según lo previsto en el presente Convenio no tendrá lugar si:

1. La sentencia no es firme o si la persona considerada tiene alguna otra causa penal en fase de enjuiciamiento, sin haber recaído aún sentencia.

2. El hecho por el que haya sido condenado no constituye delito según la legislación del Estado de cumplimiento, o no habría constituido delito si hubiera sido cometido en su territorio, o no se castiga con una pena privativa de libertad.

3. No existe consentimiento por parte de la persona condenada o de su representante legal en caso de incapacidad de la misma para expresar libremente su voluntad, en razón de su edad o estado físico o mental.

4. En el momento en que se reciba la solicitud de traslado, el condenado no tiene pendiente, al menos, un periodo de seis meses de privación de libertad.

En casos excepcionales las Partes Contratantes podrán acordar el traslado

aún cuando el periodo de cumplimiento de la pena sea menor de seis meses.

Artículo 5

Para la aplicación del presente Convenio, la autoridad competente por parte del Reino de España será el Ministerio de Justicia, y por parte de la Federación de Rusia, la Fiscalía General.

Las autoridades competentes se comunicarán directamente entre sí.

Artículo 6

1. A los fines del traslado de una persona condenada para el cumplimiento de su pena, la autoridad competente de una de las Partes Contratantes deberá dirigirse a la autoridad competente de la otra Parte Contratante.

La solicitud se presentará por escrito y deberá adjuntarse a la misma:

- a) información sobre la identidad de la persona condenada (apellidos, nombre, fecha y lugar de nacimiento);
- b) información sobre la nacionalidad de la persona condenada o sobre su lugar de residencia permanente.

2. La autoridad competente del Estado de condena incluirá, además, en la solicitud:

- a) copias auténticas de la sentencia o sentencias del Tribunal sentenciador relativas al caso y documentación que acredite la firmeza de la sentencia;
- b) documentación acerca de la parte de la condena que haya sido cumplida por la persona condenada y sobre la parte de la condena que reste por cumplir;
- c) documentación acerca del cumplimiento de una pena complementaria, en caso de que hubiere alguna señalada;
- d) el contenido de los artículos de la Ley Penal en base a los cuales una persona sea condenada;
- e) el consentimiento, por escrito, de la persona condenada, al traslado en cumplimiento del presente Convenio, al territorio del Estado de cumplimiento y, en caso de incapacidad de la misma para expresar libremente su voluntad en razón de su edad o estado físico o mental, el consentimiento de su representante legal.

El Estado de cumplimiento deberá garantizar la posibilidad de que se pueda verificar a través del cónsul o de otro funcionario público, que la persona

condenada haya dado su consentimiento para su traslado de manera voluntaria.

3. La autoridad competente del Estado de cumplimiento adjuntará a la solicitud:

- a) un documento confirmando que la persona condenada es ciudadana de ese Estado o tiene su residencia permanente en el mismo;
- b) el texto de los artículos de la legislación penal que dispongan que los actos por los cuales una persona fue condenada a una pena de privación de libertad también son delito en el Estado de cumplimiento o lo serían si se hubieran cometido en el mismo.

En el caso de manifestar la conformidad con el traslado, el Estado de condena podrá adjuntar a la notificación sobre su conformidad los documentos mencionados en los párrafos a) - e) del número 2 del presente artículo.

4. En caso necesario, las autoridades competentes de cada una de las Partes podrán solicitar documentación e información complementarias.

5. El condenado o su representante legal deberán ser informados por escrito de cualquier resolución adoptada por las autoridades competentes de las Partes Contratantes en relación con la solicitud de traslado.

Artículo 7

1. La autoridad competente de la Parte Contratante a la que se haya dirigido la solicitud de traslado de un condenado para el cumplimiento de la pena informará a la mayor brevedad posible, en un plazo no superior a dos meses a partir del momento en que se hayan recibido los documentos necesarios, a la autoridad competente de la parte que formula la solicitud, de su consentimiento o denegación del traslado del condenado, de conformidad con las condiciones previstas en el presente Convenio.

2. El lugar, fecha y procedimiento para el traslado de una persona condenada se determinarán mediante acuerdo entre las instituciones competentes de ambas Partes Contratantes.

Artículo 8

1. El Estado de cumplimiento estará obligado a asegurar la continuidad del cumplimiento de la condena. El cumplimiento de la condena se regirá por la legislación de dicho Estado.

2. El cumplimiento de la condena se realizará en base a la sentencia dictada en el Estado de condena. Los órganos jurisdiccionales del Estado de cumplimiento, basándose en la sentencia dictada, determinarán, según su propia legislación, un período de privación de libertad igual al previsto en la sentencia.

3. En caso de que la legislación del Estado de cumplimiento prevea para el mismo hecho un período de privación de libertad menor que el señalado en la sentencia, los órganos jurisdiccionales del Estado de cumplimiento determinarán el período máximo de privación de libertad previsto por su legislación.

La parte de la pena cumplida por la persona condenada en el territorio del Estado de condena se deducirá del total de la condena.

4. Los órganos jurisdiccionales del Estado de cumplimiento adoptarán una resolución sobre el cumplimiento de una pena complementaria impuesta por una sentencia, en caso de que la legislación de dicha Parte prevea dicha condena para el hecho cometido. La condena complementaria se cumplirá según el procedimiento previsto en el presente artículo.

Artículo 9

1. Las consecuencias legales de la condena con respecto a una persona trasladada para el cumplimiento de una pena en el Estado de cumplimiento, serán las mismas que correspondan a las personas condenadas en el territorio de dicha Parte Contratante por el mismo hecho.

2. Una persona condenada trasladada al Estado de cumplimiento no podrá ser enjuiciada otra vez en éste, por los mismos hechos por los que fue condenada en el Estado de condena.

Artículo 10

La autoridad competente del Estado de cumplimiento informará a la autoridad competente del Estado de condena sobre cualquier resolución judicial relativa al cumplimiento de una condena.

Artículo 11

1. El cumplimiento de la parte de la pena no efectuado en el Estado de condena debido al traslado, así como la libertad total o condicional de la persona condenada, se regirán por las Leyes del Estado de cumplimiento.

2. Tanto el Estado de condena como el Estado de cumplimiento tendrán

derecho a conceder el indulto o la amnistía.

3. Únicamente el órgano jurisdiccional competente del Estado de condena podrá revisar la condena en relación con un condenado que haya sido trasladado a un Estado de cumplimiento.

Artículo 12

1. En el caso de que con posterioridad al traslado de un condenado para el cumplimiento de la pena, hubiere sido modificada la sentencia por el órgano jurisdiccional competente del Estado de condena, deberá remitirse a la autoridad competente del Estado de cumplimiento una copia de dicha resolución, así como los demás documentos necesarios. Los órganos judiciales del Estado de cumplimiento resolverán la cuestión relativa al cumplimiento de dicha resolución según el procedimiento previsto en el artículo 8 del presente Convenio.

2. Si, con posterioridad al traslado de una persona condenada para el cumplimiento de su condena, se revoca o se declara la nulidad de la sentencia, poniendo fin al procedimiento penal en el Estado de condena, deberá enviarse inmediatamente para su ejecución una copia de dicha resolución al órgano competente del Estado de cumplimiento.

3. Si, con posterioridad al traslado de un condenado para el cumplimiento de su condena se revoca la sentencia en el Estado de condena y se hubiera ordenado una nueva investigación y enjuiciamiento, se remitirá al Estado de cumplimiento copia de tal resolución así como las actuaciones relacionadas con el procedimiento penal y demás elementos necesarios para resolver la cuestión de la atribución o no de la responsabilidad a la persona condenada, conforme a la legislación de este Estado.

Artículo 13

Los gastos relacionados con el traslado del condenado en los que incurra con anterioridad a dicho traslado correrán a cargo de la Parte en la que hubieran sido ocasionados. Los demás gastos relacionados con el traslado del condenado correrán a cargo del Estado de cumplimiento.

Artículo 14

Lo dispuesto en el presente Convenio no afectará a los derechos y obligaciones de las Partes derivados de otros acuerdos internacionales en que ambas sean Partes.

Artículo 15

Las dificultades surgidas en la aplicación del presente Convenio se resolverán mediante acuerdo entre las autoridades competentes del Reino de España y de la Federación de Rusia.

Artículo 16

A los fines del presente Convenio, todos los documentos presentados a solicitud de las Partes Contratantes deberán ir provistos, bien de una traducción al idioma del Estado al que se formule la petición o al francés o inglés.

Artículo 17

Lo dispuesto en el presente Convenio se aplicará igualmente a las personas condenadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio.

Artículo 18

1. El presente Convenio está sometido a ratificación y entrará en vigor el trigésimo día después de que se intercambien los instrumentos de ratificación.

2. El presente Convenio se aplicará provisionalmente desde el momento de su firma.

3. El presente Convenio se concluye por un tiempo de duración no determinada y permanecerá en vigor hasta transcurridos seis meses a partir de la fecha en que una de las Partes envíe a la otra Parte, en forma escrita, una notificación de su intención de denunciarlo.

HECHO en Moscú, el 16 de enero de 1998, en dos ejemplares, en lenguas española y rusa, siendo los dos textos igualmente auténticos.

POR EL REINO DE ESPAÑA

[Jose Antonio
de Yturriaga
Barberán]

POR LA FEDERACION DE RUSIA

[Serguéi Vadímovich
Stepashin]

[RUSSIAN TEXT — TEXTE RUSSE]

ДОГОВОР

между Королевством Испания и Российской Федерацией
о передаче для отбывания наказания лиц,
осужденных к лишению свободы

Королевство Испания и Российская Федерация, далее именуемые
Договаривающимися Сторонами,

руководствуясь тем, что правовое сотрудничество государств
должно способствовать интересам правосудия и возвращению
отбывающих наказание лиц к нормальной жизни в обществе,

считая, что для достижения этих целей необходимо, чтобы
лицам, лишенным свободы за совершение уголовного преступления,
была предоставлена возможность отбывать наказание в стране их
гражданства или постоянного места жительства,

учитывая необходимость обеспечения полного уважения прав
человека,

договорились о нижеследующем:

Статья 1

В соответствии с положениями настоящего Договора
Договаривающиеся Стороны обязуются оказывать друг другу
максимальное содействие в отношении передачи осужденных лиц в
государство их гражданства или постоянного места жительства,
предусмотрев, что в последнем случае они не являются гражданами
государства вынесения приговора, для отбывания там оставшейся части
наказания.

Статья 2

Для целей настоящего Договора:

1. "осужденный к лишению свободы" - лицо, отбывающее наказание
в виде лишения свободы на основании вступившего в законную силу
приговора суда;

2. "Государство вынесения приговора" - государство, в котором
было назначено наказание осужденному, который может или был
передан для отбывания наказания;

3. "Государство исполнения приговора" - государство, в которое осужденный может или был передан для отбывания наказания;

Статья 3

1. Передача осужденного для отбывания наказания может осуществляться по предложению:

- Государства вынесения приговора;
- Государства исполнения приговора.

2. Осужденный, его близкие родственники или законный представитель вправе обратиться к компетентным органам Государства вынесения приговора или Государства исполнения приговора с ходатайством о передаче осужденного.

3. Государство вынесения приговора уведомляет о содержании настоящего Договора каждого осужденного, к которому может быть применен настоящий Договор.

4. Передача имеет место, когда получено согласие как Государства вынесения приговора, так и Государства исполнения приговора.

Статья 4

Передача осужденного в порядке, предусмотренном настоящим Договором не производится, если:

1. приговор не окончательный и не вступил в силу, или если против осужденного возбуждено другое уголовное дело, по которому еще не вынесен приговор;

2. по законодательству государства исполнения приговора деяние, за которое он осужден, не является преступлением, или не явилось бы преступлением, если бы было совершено на его территории, либо не влечет за собой наказания в виде лишения свободы;

3. нет согласия осужденного, а в случае неспособности его свободно изъявить свою волю из-за возраста, физического или умственного состояния, согласия его законного представителя;

4. на момент получения запроса о передаче срок лишения свободы, который осужденному еще предстоит отбыть, составляет менее шести месяцев.

В исключительных случаях Договаривающиеся Стороны могут договориться о передаче, даже если срок отбывания наказания составляет менее шести месяцев.

Статья 5

Для исполнения настоящего Договора Компетентным органом со стороны Королевства Испания является Министерство юстиции Королевства Испания, со стороны Российской Федерации - Генеральная Прокуратура Российской Федерации.

Компетентные органы сносятся друг с другом непосредственно.

Статья 6

1. В целях передачи осужденного для отбывания наказания компетентный орган одной Договаривающейся Стороны обращается к компетентному органу другой Договаривающейся Стороны.

Обращение составляется в письменной форме и к нему прилагаются:

- а) сведения о личности осужденного (фамилия, имя, отчество, время и место рождения);
- б) информация о гражданстве осужденного или его постоянном месте жительства.

2. Компетентный орган Государства вынесения приговора, кроме того, к обращению прилагает:

- а) удостоверенные копии приговора или имеющихся по делу решений вышестоящих судебных инстанций, документы о вступлении приговора в законную силу;
- б) документ о части наказания, отбытой осужденным и той части наказания, которая подлежит дальнейшему отбыванию;
- с) документ об исполнении дополнительного наказания, если оно было назначено;
- д) текст статей уголовного закона, на основании которого лицо осуждено;
- е) письменное согласие осужденного на его передачу для исполнения Договора на территорию Государства исполнения приговора, а в случае неспособности его свободно изъявить свою волю из-за возраста, физического или умственного состояния - согласие его законного представителя.

Государство вынесения приговора должно обеспечить возможность проверить через Консула или другое официальное лицо тот факт, что согласие осужденного лица на передачу было дано добровольно.

3. Компетентный орган Государства исполнения приговора к обращению прилагает:

- a) документ, подтверждающий, что осужденное лицо является гражданином данного государства или постоянно там проживает;
- b) текст статей уголовного закона, из которых видно, что действия, за которые лицо было осуждено к лишению свободы, являются преступлением и в Государстве исполнения приговора или составили бы такое преступление, если бы были совершены на территории данного государства.

В случае согласия на передачу Государство вынесения приговора прилагает к сообщению о своем согласии документы, упомянутые в подпунктах "а"- "е" пункта 2 настоящей Статьи.

4. В случае необходимости компетентные органы Сторон могут запросить дополнительные документы или сведения.

5. О решении, принятом компетентными органами Договаривающихся Сторон в связи с просьбой о передаче, сообщается в письменной форме осужденному или его законному представителю.

Статья 7

1. Компетентный орган Договаривающейся Стороны, которой направлено обращение о передаче осужденного для отбывания наказания, уведомляет в возможно короткий срок, (но не более двух месяцев) с момента получения необходимых документов, компетентный орган Договаривающейся Стороны, направившей просьбу, о согласии либо отказе на передачу или прием осужденного в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором.

2. Место, время и порядок передачи осужденного определяются по договоренности между компетентными учреждениями обеих Договаривающихся Сторон, исполняющими наказание.

Статья 8

1. Государство исполнения приговора обязано обеспечить продолжение исполнения наказания. Исполнение приговора регулируется законодательством этого Государства.

2. Назначенное осужденному наказание отбывается на основании приговора суда Государства вынесения приговора. Суд Государства исполнения приговора, исходя из вынесенного приговора, определяет по закону своего Государства такой же срок лишения свободы, как и назначенный по приговору.

3. Если по законодательству Государства исполнения приговора, за данное деяние предельный срок лишения свободы меньше, чем назначенный по приговору, суд Государства исполнения приговора определяет максимальный срок лишения свободы, предусмотренный законодательством этой Стороны.

Часть наказания, отбываемая осужденным на территории Государства вынесения приговора, засчитывается в срок наказания.

4. Решение об исполнении назначенного по приговору дополнительного наказания принимается судом Государства исполнения приговора, если такое наказание за совершенное деяние предусмотрено законодательством этой Стороны. Дополнительное наказание исполняется в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

Статья 9

1. В отношении лица, переданного для отбывания наказания Государству исполнения приговора, наступают такие же правовые последствия осуждения, как и в отношении лиц, осужденных на территории этой Договаривающейся Стороны за совершение такого же деяния.

2. Осужденное лицо, переданное для исполнения приговора вынесенного компетентным судом другой Стороны, не может быть вновь привлечено к уголовной ответственности на территории Государства исполнения приговора за то же деяние, в связи с которым был вынесен вступивший в силу приговор.

Статья 10

Компетентный орган Государства исполнения приговора уведомляет компетентный орган Государства вынесения приговора о решении суда об исполнении приговора.

Статья 11

1. Исполнение неотбытого до передачи осужденного наказания, а также полное или частичное освобождение от наказания после принятия решения об исполнении приговора осуществляются в соответствии с законодательством Государства исполнения приговора.

2. Как Государство вынесения приговора, так и Государство исполнения приговора вправе осуществлять помилование и амнистию.

3. Пересмотр приговора в отношении осужденного, переданного Государству исполнения приговора, может быть осуществлен только компетентным судом Государства вынесения приговора.

Статья 12

1. Если после передачи осужденного для отбывания наказания, приговор изменен компетентным судом Государства вынесения приговора, копия решения об этом и другие необходимые документы направляются компетентному органу Государства исполнения приговора. Суд Государства исполнения приговора решает вопрос об исполнении такого решения в порядке, предусмотренном статьей 8 настоящего Договора.

2. Если после передачи осужденного для отбывания наказания приговор отменен с прекращением уголовного дела в Государстве вынесения приговора, копия решения об этом немедленно направляется для исполнения компетентному органу Государства исполнения приговора.

3. Если после передачи осужденного для отбывания наказания приговор в Государстве вынесения приговора отменен и предусмотрено новое расследование или судебное разбирательство, копия решения об этом, материалы уголовного дела и другие необходимые материалы направляются Государству исполнения приговора для решения вопроса о привлечении его к ответственности по законодательству этого Государства.

Статья 13

Связанные с передачей осужденного расходы, возникшие до его передачи, несет Сторона, у которой они возникли. Другие расходы, связанные с передачей осужденного, несет Государство исполнения приговора.

Статья 14

Положения настоящего Договора не затрагивают прав и обязанностей Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются.

Статья 15

Вопросы, возникающие при применении настоящего Договора, решаются по согласованию между компетентными органами Королевства Испания и Российской Федерации.

Статья 16

Для целей настоящего Договора все документы, представленные по запросу Договаривающихся Сторон должны быть снабжены переводом на язык запрашивающего государства, либо на английский или французский язык.

Статья 17

Положения настоящего Договора применяются также в отношении лиц, осужденных до вступления настоящего Договора в силу.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 18

1. Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу на тридцатый день после обмена ратификационными грамотами.
2. Настоящий Договор будет временно применяться с момента подписания.
3. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и будет оставаться в силе до истечения шести месяцев со дня, когда одна Сторона направит другой Стороне письменное уведомление о своем намерении прекратить его действие.

Совершено в Москве "16" августа 1998 г. в двух экземплярах, каждый на испанском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Королевство Испания

За Российскую Федерацию

[FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS]

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LA FÉDÉRATION
DE RUSSIE SUR LE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES
CONDAMNÉES POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE PEINES
PRIVATIVES DE LIBERTÉ

Le Royaume d'Espagne et la République de Russie,

Considérant que la coopération judiciaire entre les Etats doit servir les intérêts d'une administration correcte de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes qui accomplissent une peine,

Considérant que ces objectifs exigent que les personnes privées de liberté à la suite d'une infraction aient la possibilité de subir leur condamnation dans le pays dont elles sont ressortissantes ou dans lequel elles ont leur résidence permanente,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

1. Conformément aux dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées à l'Etat dont elles sont ressortissantes ou dans lequel elles ont leur résidence permanente, en tenant compte, dans le dernier cas, du fait que ces personnes ne soient pas ressortissantes de l'Etat de condamnation, pour subir dans celui-ci le reste de la condamnation.

Article 2

Aux fins de la présente Convention:

1. L'expression "condamné à une peine privative de liberté" désigne toute personne qui subit une peine consistant en la privation de liberté en vertu d'un jugement définitif.
2. "Etat de condamnation" désigne l'Etat où a été condamnée la personne qui peut être ou a été transférée pour subir sa peine.
3. "Etat d'exécution" désigne l'Etat vers lequel le condamné peut être transféré ou l'a déjà été pour subir sa peine.

Article 3

1. Le transfèrement de la personne condamnée pour subir sa peine peut être demandé par:
 - l'Etat de condamnation
 - l'Etat d'exécution.

2. La personne condamnée, ses parents les plus proches ou son représentant légal ont le droit de demander aux autorités compétentes de l'Etat de condamnation au de l'Etat d'exécution le transfèrement de la personne condamnée.

3. L'Etat de condamnation informera du contenu de la présente Convention toutes les personnes condamnées auxquelles la présente Convention peut être applicable.

4. Le transfèrement aura lieu quand tant le consentement de l'Etat de condamnation que celui de l'Etat d'exécution aura été obtenu.

Article 4

Le transfèrement de la personne condamnée en vertu de la présente Convention n'aura pas lieu si:

1. Le jugement n'est pas définitif ou si la personne en question fait l'objet d'une autre procédure pénale en phase de jugement, sans qu'une décision ait été rendue.

2. Le fait pour lequel elle a été condamnée ne constitue pas une infraction au regard du droit de l'Etat d'exécution, ou si elle n'avait pas constitué une infraction si elle avait été commise sur son territoire, ou si elle n'est pas punie par une peine privative de liberté.

3. S'il n'y a pas consentement de la personne condamnée ou de son représentant légal en cas d'incapacité de celle-ci pour exprimer librement sa volonté, en raison de son âge ou de son état physique ou mental.

4. Au moment où la demande de transfèrement est reçue, le condamné n'a pas encore à subir au moins six mois de privation de liberté.

Dans des cas exceptionnels, les Parties contractantes peuvent convenir du transfèrement même si la durée de la condamnation que le condamné a encore à subir est inférieure à six mois.

Article 5

Pour l'application de la présente Convention, l'autorité compétente pour le Royaume d'Espagne sera le Ministère de la Justice et pour la Fédération de Russie, le Procureur général.

Les autorités compétentes communiqueront entre elles directement.

Article 6

1. Aux fins de transfèrement d'une personne condamnée pour subir sa peine, l'autorité compétente de l'une des Parties contractantes devra s'adresser à l'autorité compétente de l'autre Partie contractante.

La demande de transfèrement doit être formulée par écrit et il faut y joindre:

a) des informations sur l'identité de la personne condamnée (noms, prénom, lieu et date de naissance),

b) des informations sur la nationalité de la personne condamnée et sur son lieu de résidence permanente.

2. L'autorité compétente de l'Etat de condamnation joindra, en outre, à la demande:

a) des copies authentiques du jugement ou des jugements du Tribunal qui les a rendues relatives au cas et les pièces attestant que le jugement est définitif,

b) des pièces concernant la partie de la condamnation déjà subie par la personne condamnée et sur la partie de la condamnation qui reste à subir;

c) des pièces concernant l'exécution d'une peine complémentaire au cas où il y en aurait une;

d) le contenu des articles du Code Pénal sur la base desquels une personne est condamnée;

e) le consentement, par écrit, de la personne condamnée, au transfèrement en vertu de la présente Convention, sur le territoire de l'Etat d'exécution et, en cas d'incapacité de celle-ci pour exprimer librement sa volonté en raison de son âge ou de son état physique ou mental, le consentement de son représentant légal.

L'Etat d'exécution doit donner la possibilité de vérifier par l'intermédiaire du consul ou de tout autre fonctionnaire public que la personne condamnée a donné son consentement au transfèrement volontairement.

3. L'autorité compétente de l'Etat d'exécution joindra à la demande:

a) un document indiquant que le condamné est ressortissant de cet Etat ou a sa résidence permanente dans celui-ci,

b) une copie des dispositions légales desquelles il résulte que les actes pour lesquels une personne a été condamnée à une peine privative de liberté constituent aussi une infraction au regard du droit de l'Etat d'exécution ou en constitueront une si elles survenaient sur son territoire.

Au cas où il donne sa conformité au transfèrement, l'Etat de condamnation pourra joindre à la notification concernant sa conformité, les documents indiqués aux paragraphes a)-e) de l'alinéa 2 du présent Article.

4. En cas de nécessité, les autorités compétentes de chacune des Parties peuvent demander des pièces et des informations complémentaires.

5. Le condamné ou son représentant légal doivent être informés par écrit de toute décision prise par les autorités compétentes des Parties contractantes concernant la demande de transfèrement.

Article 7

1. L'autorité compétente de la Partie contractante à laquelle la demande de transfèrement d'un condamné a été adressée pour l'exécution de la peine doit informer dans les meilleurs délais, dans un délai non supérieur à deux mois à partir du moment où les pièces nécessaires ont été reçues, l'autorité compétente de la partie qui formule la demande, de sa décision d'accepter ou de refuser le transfèrement du condamné, conformément aux conditions prévues dans la présente Convention.

2. Le lieu, la date et la procédure pour le transfèrement d'une personne condamnée seront établis moyennant accord entre les institutions compétentes des deux Parties contractantes.

Article 8

1. L'Etat d'exécution est obligé d'assurer la continuité de l'exécution de la condamnation. L'exécution de la condamnation sera régie par la législation dudit Etat.

2. L'exécution de la condamnation se fera sur la base du jugement rendu dans l'Etat de condamnation. Les organes judiciaires de l'Etat d'exécution, en se basant sur le jugement rendu, détermineront, selon leur propre législation, une période privative de liberté égale à celle prévue dans le jugement.

3. Au cas où la législation de l'Etat d'exécution prévoit pour le même fait une période de privation de liberté inférieure à celle fixée dans le jugement, les organes judiciaires de l'Etat d'exécution détermineront la période maximum de privation de liberté prévue par sa législation.

La partie de la peine subie par la personne condamnée sur le territoire de l'Etat de condamnation sera déduite du total de la condamnation.

4. Les organes judiciaires de l'Etat d'exécution prendront une décision sur l'exécution d'une peine complémentaire imposée par un jugement au cas où la législation de cette Partie prévoit cette condamnation pour le fait commis. La condamnation complémentaire sera exécutée conformément à la procédure prévue dans le présent Article.

Article 9

1. Les conséquences légales de la condamnation concernant une personne transférée pour l'exécution d'une peine dans l'Etat d'exécution seront les mêmes que celles des personnes condamnées sur le territoire de ladite Partie contractante pour le même fait.

2. Une personne condamnée transférée dans l'Etat d'exécution ne peut pas être de nouveau jugée dans celui-ci pour les mêmes faits que ceux pour lesquels elle a été condamnée dans l'Etat de condamnation.

Article 10

L'autorité compétente de l'Etat d'exécution informera l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de toute décision judiciaire relative à l'exécution d'une condamnation.

Article 11

1. L'exécution de la partie de la peine non subie dans l'Etat de condamnation en raison du transfèrement, ainsi que la liberté totale ou conditionnelle de la personne condamnée seront régies par la loi de l'Etat d'exécution.

2. Tant l'Etat de condamnation que l'Etat d'exécution auront le droit d'accorder la grâce ou l'amnistie.

3. Seul l'organe judiciaire compétent de l'Etat de condamnation peut réviser la condamnation d'un condamné qui a été transféré à l'Etat d'exécution.

Article 12

1. Au cas où après le transfèrement d'un condamné pour l'exécution de la peine, le jugement aurait été modifié par l'organe judiciaire compétent de l'Etat de condamnation, celui-ci devra remettre à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution une copie de ladite décision ainsi que les autres pièces nécessaires. Les organes judiciaires de l'Etat d'exécution régleront la question relative à l'exécution de ladite décision conformément à la procédure prévue à l'Article 8 de la présente Convention.

2. Si après le transfèrement d'une personne condamnée pour l'exécution de sa condamnation, la décision est révoquée ou annulée, mettant ainsi fin à la procédure pénale dans l'Etat de condamnation, ce dernier devra envoyer immédiatement une copie de cette décision pour son exécution à l'organe compétent de l'Etat d'exécution.

3. Si après le transfèrement d'un condamné pour l'exécution de sa condamnation, la décision est révoquée dans l'Etat de condamnation et si l'on avait ordonné une nouvelle enquête et un nouveau jugement, une copie de cette décision ainsi que du dossier relatif à la procédure pénale et les autres éléments nécessaires pour régler la question de l'attribution ou de la non responsabilité à la personne condamnée conformément à la législation de cet Etat, sera remise à l'Etat d'exécution.

Article 13

Les frais occasionnés par le transfèrement du condamné avant le transfèrement sont à la charge de la Partie où ils ont été occasionnés. Les autres frais occasionnés par le transfèrement du condamné sont à la charge de l'Etat d'exécution.

Article 14

Les dispositions de la présente Convention n'affecte pas les droits et obligations des Parties découlant d'autres accords internationaux dont ils sont tous deux Parties.

Article 15

Les difficultés survenues dans l'application de la présente Convention seront réglées moyennant accord entre les autorités compétentes du Royaume d'Espagne et de la Fédération de Russie.

Article 16

Aux fins de la présente Convention, toutes les pièces présentées sur demande des Parties contractantes devront être accompagnées soit d'une traduction dans la langue de l'Etat auquel la demande est adressée soit en français ou en anglais.

Article 17

Les dispositions de la présente Convention s'applique également aux personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 18

1. La présente Convention sera soumise à ratification et entrera en vigueur le 30e jour après que les instruments de ratification aient été échangés.

2. La présente Convention sera appliquée provisoirement à partir du moment de sa signature.

3. La présente Convention est signée pour une durée indéterminée et sera en vigueur jusqu'à ce que se soit écoulés six mois à partir de là date où l'une des Parties envoie à l'autre Partie, par écrit, une notification de son intention de la dénoncer.

Fait à Moscou, le 16 janvier 1998, en deux exemplaires, en langues espagnole et russe, les deux textes faisant également foi:

Pour le Royaume d' Espagne :

JOSÉ ANTONIO DE YTURRIAGA BARBERÁN

Pour la Fédération de Russie :

SERGUÉI VADÍMOVICH STEPASHIN

[TRANSLATION -- TRADUCTION]

CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN AND THE RUSSIAN FEDERATION ON THE TRANSFER OF CONVICTED PERSONS FOR THE ENFORCEMENT OF CUSTODIAL SENTENCES

The Kingdom of Spain and the Russian Federation,

Considering that judicial cooperation between States should serve the interest of the fair administration of justice and promote the social rehabilitation of persons serving sentences,

Considering that, with a view to achieving these aims, persons deprived of their liberty for commission of a criminal offence should be given an opportunity to serve their sentences in the country of which they are nationals or in which they have their permanent residence,

Considering the need to guarantee full respect for human rights,

Have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties undertake to extend to each other, in accordance with the provisions of this Convention, the broadest possible cooperation with respect to the transfer of convicted persons to serve the remainder of their sentences in the State of which they are nationals or in which they have their permanent residence, taking into account that, in the latter case, such persons are not nationals of the enforcing State.

Article 2

For the purposes of this Convention:

(1) The term "persons sentenced to deprivation of liberty" shall mean any person serving a custodial sentence, involving deprivation of liberty, which is final.

(2) The "sentencing State" shall mean the State in which the person who may be or has already been transferred in order to serve his sentence is convicted.

(3) "Enforcing State" shall mean the State to which the convicted person may be or has already been transferred for the purpose of serving his sentence.

Article 3

1. The convicted person may be transferred in order to serve his sentence at the request of:

- the sentencing State;
- the enforcing State.

2. The convicted person, his closest relatives or his legal representative shall have the right to request the transfer from the competent authorities of the sentencing State or the enforcing State.
3. The sentencing State shall explain the content of this Convention to any convicted person who may be within its scope.
4. The transfer shall be effected when consent has been obtained from both the sentencing State and the enforcing State.

Article 4

The transfer of the convicted person in accordance with the provisions of this Convention shall not take place if:

1. The sentence is not final or the person in question is being tried in other judicial proceedings for which a judgement has not yet been issued;
2. The act for which he was convicted does not constitute a criminal offence under the legislation of the enforcing State, would not constitute a criminal offence if it had been committed in the territory of that State, or is not punishable by the deprivation of liberty;
3. Consent has not been given by the convicted person or, should the convicted person's age or physical or mental condition impair his ability to express his wishes freely, by his legal representative;
4. Less than six months of deprivation of liberty remain to be served at the time the transfer request is received.

In exceptional cases, the Contracting Parties may agree to a transfer even when less than six months of the penalty remain to be served.

Article 5

For the purpose of implementing this Convention, the competent authority for the Kingdom of Spain shall be the Ministry of Justice and for the Russian Federation, the Office of the Procurator-General.

The competent authorities shall communicate directly with each other.

Article 6

1. For the purpose of transferring a convicted person to serve his sentence, the competent authority of one of the Contracting Parties shall apply to the competent authority of the other Contracting Party.

The application shall be made in writing and shall be accompanied by:

- (a) Information on the identity of the convicted person (first and last names, date and place of birth);
- (b) Information on the nationality of the convicted person or on his place of permanent residence.

2. In its application, the competent authority of the sentencing State shall also include:

(a) Authentic copies of the judgement or judgements of the sentencing court in the case and a document attesting that the sentence is final;

(b) Documentation on the portion of the sentence already served by the convicted person and the length of time remaining to be served;

(c) Documentation on the execution of an additional sentence, if any is indicated;

(d) Tenor of the articles of the penal legislation forming the basis for the person's convictions;

(e) Written consent of the convicted person to be transferred, pursuant to this Convention, to the territory of the enforcing State and, should the convicted person's age or physical or mental condition impair his ability to express his wishes freely, the consent of his legal representative.

The enforcing State shall guarantee the possibility of verifying, through the consul or other public official, that the convicted person has voluntarily given his consent to be transferred.

3. The application by the competent authority of the enforcing State shall include:

(a) A document confirming that the convicted person is a citizen of, or makes his permanent residence in, that State;

(b) The text of the articles of its penal legislation providing that the acts for which a person was sentenced to deprivation of liberty are also a criminal offence in the enforcing State or would be if they had been committed there.

If it consents to the transfer, the sentencing State shall include in its notification of consent the documents enumerated in paragraphs (a) to (e) of paragraph 2 of this article.

4. If necessary, the competent authorities of each of the Parties shall request additional documentation and information.

5. The convicted person or his legal representative must be informed in writing of any decision taken by the competent authorities of the Contracting Parties concerning his request for transfer.

Article 7

1. The competent authority of the Contracting Party requested to transfer a convicted person for the enforcement of his sentence shall notify the competent authority of the requesting Party, at the earliest possible date, and in any case, not later than two months from the time the necessary documents are received, of its decision to grant or deny the transfer of the convicted person, in accordance with the conditions set out in this Convention.

2. The place, date and procedure for the transfer of a convicted person shall be determined by agreement between the competent institutions of the two Contracting Parties.

Article 8

1. The enforcing State shall ensure the continued execution of the sentence. The sentence shall be served in accordance with the legislation of that State.
2. The sentence shall be served on the basis of the judgement handed down in the sentencing State. On that same basis, the judicial authorities of the enforcing State shall determine, in accordance with the legislation of that State, a period of deprivation of liberty equal to that provided for in the sentence.
3. If, for the same act, the legislation of the enforcing State prescribes a period of deprivation of liberty less than that indicated in the judgement, the judicial authorities of the enforcing State shall determine the maximum period of deprivation of liberty provided for in the legislation of that State.

The portion of the sentence already served by the convicted person in the territory of the sentencing State shall be deducted from the total length of the sentence.

4. The judicial authorities of the enforcing State shall take a decision on the execution of an additional sentence imposed by a judgement where such a sentence is prescribed by the legislation of that Party for the act committed. The additional sentence shall be served in accordance with the procedure provided for in this article.

Article 9

1. The legal consequences of the conviction for persons transferred to the enforcing State for the execution of a sentence shall be the same as those for persons convicted on the same grounds in the territory of that Contracting Party.
2. A convicted person transferred to the enforcing State may not be tried again in that State for the same offences for which he was sentenced in the sentencing State.

Article 10

The competent authority of the enforcing State shall inform the coimpetent authority of the sentencing State of any court decision concerning execution of a sentence.

Article 11

1. Execution of the portion of a sentence which has not been served in the sentencing State owing to the transfer, as well as the release or parole of the convicted person, shall be governed by the laws of the enforcing State.
2. Both the sentencing State and the enforcing State shall have the right to grant pardon or amnesty.
3. Only the competent court or tribunal of the sentencing State may review the sentence of a convicted person who has been transferred to an enforcing State.

Article 12

1. Should the competent court or tribunal of the sentencing State amend the judgement after a convicted person is transferred for execution of his sentence, a copy of that decision and the other necessary documents must be submitted to the competent authority of the enforcing State. The judicial authorities of the enforcing State shall settle the question with regard to execution of the decision in accordance with the procedure set out in article 8 of this Convention.
2. If the judgement is revoked or declared null and void after a convicted person has been transferred in order to serve his sentence, and criminal proceedings in the sentencing State are terminated, a copy of that decision must be sent imminately to the competent authority of the enforcing State for the purpose of its execution.
3. If the judgement handed down in the sentencing State is revoked after a convicted person has been transferred in order to serve his sentence and a new investigation and retrial are ordered, a copy of that decision shall be submitted to the enforcing State, together with the records of the criminal proceedings and other elements necessary to settle the question of the convicted person's liability under the legislation of the enforcing State.

Article 13

The costs incurred in connection with the transfer of the convicted person prior to actual transfer shall be borne by the Party in which they were incurred. Other costs relating to the transfer of the convicted person shall be borne by the enforcing State.

Article 14

The provisions of this Convention shall not affect the rights and obligations of the Parties deriving from other international agreements to which they are both parties.

Article 15

Any difficulties that may arise with regard to the application of this Convention shall be resolved by agreement between the competent authorities of the Kingdom of Spain and the Russian Federation.

Article 16

For the purposes of this Convention, all documents submitted at the request of the Contracting Parties shall be accompanied by a translation into the language of the requested State, or into French or English.

Article 17

The provisions of this Convention shall also apply to persons convicted prior to its entry into force.

Article 18

1. This Convention shall be subject to ratification and shall enter into force on the 30th day following the exchange of the instruments of ratification.
2. This Convention shall apply provisionally from the date of its signature.
3. This Convention is concluded for an indefinite period and shall remain in force until six months have elapsed from the date on which one of the Parties sends the other Party written notification of its intention to denounce it.

Done in Moscow, on 16 January 1998, in duplicate in the Spanish and Russian languages, both texts being equally authentic.

For the Kingdom of Spain:

JOSÉ ANTONIO DE YTURRIAGA BARBERÁN

For the Russian Federation:

SERGUÉI VADÍMOVICH STEPASHIN

